



RESOLUCION N. 02038

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades delegadas por la Resolución No. 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución No. 02566 del 15 de agosto de 2018 ambas de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, en cumplimiento de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, el Decreto 948 de 5 de junio de 1995 hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, la Resolución 6910 de 2010 emanada de la Secretaría Distrital de Ambiente del Bogotá D.C., el Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974, la Resolución 627 de 7 de abril de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

La Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las funciones conferidas por el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio de las cuales le corresponde ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, atendiendo a los radicados 2012ER051716 de 24 de abril de 2012, 2012ER52636 de 25 de abril de 2012 y el Acta/ Requerimiento 1746 de 18 de octubre de 2012, realizó visita técnica de seguimiento y control ruido el día 28 de octubre de 2012 al establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, registrado con matrícula mercantil N.º 0002048690 del 06 de diciembre de 2010, ubicado en la Carrera 91 No. 147- 55 Local 33 de la Localidad de Suba de esta ciudad, para establecer el cumplimiento legal en materia de emisiones de ruido, de conformidad con la normativa ambiental vigente, concretamente con lo estipulado en la Resolución 627 de 2006 y el Decreto 948 de 1995.



II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que esta Entidad, con el fin de atender al radicado al radicado 2012ER051716 de 24 de abril de 2012, 2012ER52636 de 25 de abril de 2012 y el Acta/ Requerimiento 1746 de 18 de octubre de 2012, llevó a cabo Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido el día 28 de octubre de 2012 al precitado establecimiento de comercio, para establecer el cumplimiento legal en materia de ruido de conformidad con la Resolución 627 de 2006 y el Decreto 948 de 1995.

Que en consecuencia, de la Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, emitió el **Concepto Técnico No. 01396 del 14 de febrero de 2014**, en donde se estableció, que el nivel equivalente del aporte sonoro de las fuentes específicas (**Leq_{emisión}**) fue de **87,1dB(A) en horario nocturno**, por lo que se concluyó que el generador de la emisión **INCUMPLE** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma, en Sector B. Tranquilidad y ruido moderado, Zona de residencial con zonas delimitadas de comercio y servicio, sector normativo 14, subsector de uso II en horario nocturno, donde los valores máximos permisibles no puede superar los 55dB(A) en horario nocturno, por lo cual incumple con el artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006.

III. EL AUTO DE INICIO

Que mediante el **Auto No. 03247 del 9 de junio de 2014**, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se inició trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, ubicado en la Carrera 91 No. 147- 55 Local 33 de la Localidad de Suba de esta ciudad.

Que el Auto anteriormente enunciado, fue publicado en el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente el día 30 de diciembre de 2014, comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios mediante Radicado No. 2014EE114467 del 10 de julio de 2014 y notificado por aviso el 16 de septiembre de 2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE150389 del 11 de septiembre de 2014, previa citación para notificación personal mediante radicado N.º 2014EE106125 a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE**, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**.



IV. DEL AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS Y DESCARGOS

Que mediante **Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015**, la Secretaria Distrital de Ambiente, formuló a la señora **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO** con matrícula mercantil N.º 002048690 del 06 de septiembre de 2010, los siguientes cargos:

“**Cargo Primero:** Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona residencial de tranquilidad y ruido moderado en un horario nocturno, generados mediante el empleo de instrumentos musicales, un (1) home theater y cuatro (4) parlantes, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del artículo 9 de la Resolución 0627 de 2006.”

“**Cargo segundo:** Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según lo establecido en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995”

“**Cargo Tercero:** no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas según lo establecido en el artículo 51 del Decreto 948 de 1995”

Que el citado Acto Administrativo, fue notificado por edicto con fecha de fijación 18 de septiembre de 2015 y desfijado el 24 de septiembre de 2015, a la señora **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, ubicado en la Carrera 91 No. 147- 55 de la Localidad de Suba de esta ciudad, previa citación para notificación personal, mediante radicado N.º 2015EE137765, de conformidad con lo expuesto por el artículo 24 de la ley 1333 de 2009, con constancia de ejecutoria del día 25 de septiembre del mismo año.

Que de acuerdo con el artículo segundo del Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015, la señora **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, contaba con un término de diez (10), días hábiles, para que, directamente o por medio de apoderado debidamente constituido, presentara los descargos a que hubiere lugar y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que considerara pertinentes y que fueren conducentes.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la señora **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, no presentó escrito de descargos y solicitud de pruebas, en contra del Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015.

V. DEL AUTO DE PRUEBAS



Que habiéndose vencido el término de traslado y descrito el mismo, se expidió el Auto No. 03313 del 27 de junio de 2018, mediante el cual se dispuso a abrir a pruebas el respectivo trámite administrativo de carácter ambiental, decretándose y teniéndose como tal:

- Radicado 2012ER051716 del 24 de abril de 2012
- Radicado 2012ER052636 de 25 de abril de 2012
- Concepto Técnico 01396 de 14 de febrero de 2014 con sus anexos
- Acta de visita seguimiento y control ruido de 28 de noviembre de 2012
- Certificado de calibración electrónica del sonómetro serie 30443
- Certificado de calibración electrónica del calibrador acústico serie 34682964

Que el Auto No. 03313 del 27 de junio de 2018, fue notificado por aviso, la señora **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO** ubicado en la Carrera 91 No. 147- 55 Local 33 de la Localidad de Suba de esta ciudad, previa citación para notificación personal, mediante radicado N.º 2018EE149088.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

• FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho.

Que de la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.



Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”* y en el artículo 80 ordena al Estado que *“...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”*. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que además, en el inciso 2 del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del estado para *“imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que este no sea vulnerado.

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función pública deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que en el presente caso es menester recordar que el régimen sancionador, se encuentra sujeto a los principios constitucionales de legalidad, tipicidad y reserva de Ley, principios rectores del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.



Que en sentencia C- 506 del 3 de julio de 2002, Expediente D-3852, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional respecto a la actividad sancionadora ha manifestado:

“...la actividad sancionadora de la Administración persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 209 de la Carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) ...”.

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, esta Secretaría se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se toman.

Que la Ley 1333 de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio ambiental, en la que se señaló en el artículo primero en cuanto a la titularidad de la potestad sancionatoria:

“ARTÍCULO 1º. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA AMBIENTAL, “El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos...”.

Que el artículo 5 de la citada Ley consagra:

“ARTÍCULO 5: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO 1o. *En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.”*

Que en el artículo 6, se establecieron las causales de atenuación de la responsabilidad en materia ambiental, así:

“...Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes:

- 1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.*
- 2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor.*
- 3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana.”*



Que el artículo 7 de la Ley 1333 establece entre las causales de agravación de responsabilidad en materia ambiental:

- “...1. Reincidencia En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.”

Que la Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 establece las sanciones en las que se encuentra inmerso quien resulte responsable de la infracción ambiental, las cuales son:

- “...1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
 3. Revocatoria o caducidad de concesión, permiso o registro.
- (...).
- Parágrafo1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime a Infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar...”.

Que por otra parte, el Decreto 948 de 1995, compilado por el Decreto 1076 de 2015, establece:

“**Artículo 2.2.5.1.2.12. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijara mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido ambiental, para todo el territorio nacional. Dichos estándares determinaron los niveles admisibles de presión sonora, para cada uno de los sectores clasificados en la presente sección, y establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta. Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijaran para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente. Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que, generada por fuentes móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al medio ambiente.”

Que el artículo 2.2.5.1.5.4. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, establece:

“**Prohibición de generación de ruido.** Prohibase la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.” (Artículo 45 del Decreto 948 de 1995)

Por lo anterior, la vulneración se presenta cuando se realiza la medición a las fuentes emisoras de ruido en el establecimiento de comercio, generando como resultado que las



mismas superan los estándares permisibles señalados en la Resolución 627 del 07 de abril de 2006.

Que el artículo 51 del Decreto 948 de 1995 compilado en el artículo 2.2.5.1.10 del Decreto 1076 de 2015, establece: *“Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana deberán emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente.”*

Que a su vez, la Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, emitida por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la época, señaló en su artículo 9 los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, entendiéndose emisión de ruido según el anexo 1 de dicha norma como: *“... la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público”*.

• RÉGIMEN PROCESAL ADMINISTRATIVO APLICABLE

Que en el presente caso es menester recordar que el régimen sancionador, se encuentra sujeto a los principios constitucionales de legalidad, tipicidad y reserva de ley, principios rectores del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Al respecto, en relación con la norma procesal aplicable, encontramos que la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, en su artículo 308, consagró el régimen de transición y vigencia de la siguiente manera:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior...”

Que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia a partir del 2 de julio de 2012, ordenando su aplicación a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones administrativas que se inicien con posterioridad a dicha fecha, estableciendo a su vez, que los que estuvieran en curso al momento de entrar a regir, seguirían tramitándose conforme al régimen jurídico anterior.



Que en consecuencia, debe precisarse que la norma aplicable al caso particular es el Decreto 01 de 1984, teniendo en cuenta que se tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de infracción el día 24 de abril de 2012 mediante radicado N° 2012ER051716.

Que, vale aclarar, que el presente trámite administrativo sancionatorio, fue iniciado y llevado hasta la etapa probatoria bajo la norma procedimental administrativa Ley 1437 de 2011, debiendo ser lo correcto la aplicación del Decreto 01 de 1984, a pesar de ello se verifica dentro del proceso administrativo sancionatorio que se han garantizado los derechos de la defensa, debido proceso, contradicción y legalidad, pues son claras las notificaciones por aviso y por edicto desarrolladas a la investigada de los autos proferidos dentro del plenario acorde a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y la ley 1333 de 2009.

Que, en ese sentido, una vez hecho el anterior análisis, se puede establecer que se ha cumplido con los términos requeridos tanto por la norma especial como procedimental se le ha respetado y salvaguardado sus derechos constitucionales y legales.

VI. ANÁLISIS PROBATORIO Y DECISIÓN

Con el objeto de abordar la discusión jurídica en el caso *sub examine* de cara a los hechos, los cargos formulados a través del **Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015**, las pruebas obrantes en el expediente, así como la normativa y jurisprudencia que respalda el tratamiento jurídico de la administración de los recursos naturales, conviene analizar el alcance de las disposiciones normativas cuya infracción se le atribuye a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE**, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.582.623, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**; por lo que es pertinente profundizar en el juicio de responsabilidad en materia sancionatoria ambiental, en torno a la imputación efectuada por transgresión a las normas sobre protección ambiental, en materia de emisión de ruido, específicamente lo establecido en el artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006 y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, compilado actualmente en el artículo 2.2.5.1.5.4. 2.2.5.1.5.10 del Decreto 1076 de 2015.

De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar la situación fáctica del presunto infractor, frente a los cargos imputados de la siguiente manera:

- **Cargo Primero Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015:**



“**Cargo Primero:** Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona residencial de tranquilidad y ruido moderado en un horario nocturno, generados mediante el empleo de instrumentos musicales, un (1) home theater y cuatro (4) parlantes, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del artículo 9 de la Resolución 0627 de 2006.”

El artículo 9, Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006, expone:

“**Artículo 9º.** Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la Tabla 1 de la presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):

TABLA 1

Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A)

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A)	
		Día	Noche
Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado	Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.	65	55
	Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación.		
	Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre.		

Parágrafo 1º. Cuando la emisión de ruido en un sector o subsector trascienda a sectores o subsectores vecinos o inmersos en él, los estándares máximos permisibles de emisión de ruido son aquellos que corresponden al sector o subsector más restrictivo.

Parágrafo 2º. Las vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales, en general las vías, son objeto de medición de ruido ambiental, mas no de emisión de ruido por fuentes móviles.

Parágrafo 3º. Las vías troncales, autopistas, vías arterias y vías principales, en áreas urbanas o cercanas a poblados o asentamientos humanos, no se consideran como subsectores inmersos en otras zonas o subsectores.

Parágrafo 4º. En los sectores y/o subsectores en que los estándares máximos permisibles de emisión de ruido de la Tabla 1, son superados a causa de fuentes de emisión naturales, sin que exista intervención del hombre, estos valores son considerados como los estándares máximos permisibles, como es el caso de cascadas, sonidos de animales en zonas o parques naturales.

(...)”

Que teniendo en cuenta lo detectado técnicamente por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., por medio de la Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido, realizada el día 28 de octubre de 2012, y cuyos resultados fueron plasmados en el **Concepto Técnico No. 01396 de 14 de febrero de 2014**, en el establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO** ubicado en la Carrera 91 No. 147- 55 Local 33 de la Localidad de Suba de esta ciudad, se logra evidenciar la vulneración de la norma ambiental, tal y como lo señala el artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006 en Sector B. tranquilidad y ruido moderado , Zona residencial con zonas delimitadas de comercio, sector normativo 14, subsector de uso II en horario nocturno, donde los valores máximos permisibles no pueden superar los



55dB(A), la cual establece los parámetros técnicos de medición y los decibeles máximos permitidos, para cada una de las zonas, horarios y sectores de acuerdo al tipo de actividades comerciales y de servicios que pueda desarrollar el establecimiento de comercio.

Que de conformidad con la vista antes referida se verificó que el nivel equivalente del aporte sonoro de las fuentes específicas encontradas fue de ($Leq_{emisión}$) **87,1dB(A) en horario nocturno**, concluyendo que el generador de la emisión **INCUMPLE** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma, en una en **Sector B. tranquilidad y ruido moderado**, que corresponde a la ubicación de Zona residencial en horario nocturno, donde los valores máximos permisibles no puede superar los **55dB(A)**, lo que permite concluir que el cargo primero formulado en el Artículo Primero del Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015, está llamado a prosperar al superar los niveles de emisión sonora permitidos por la norma ambiental.

- **Cargo Segundo y Tercero Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015:**

“**Cargo segundo:** Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según lo establecido en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995”

“**Cargo Tercero:** no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas según lo establecido en el artículo 51 del Decreto 948 de 1995”

El Decreto 948 de 2015 compilado actualmente por el Decreto 1076 de 2015, establece:

“Artículo 2.2.5.1.5. 4. Prohibición de generación de ruido. Prohíbese la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.” (Artículo 45 del Decreto 948 de 1995)

“Artículo 2.2.5.1.5.10. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medioambiente o la salud humana deberán emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” (Artículo 51 del Decreto 948 de 1995)

De acuerdo al material probatorio obrante en el expediente y lo evidenciado en la Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido realizada el 28 de octubre de 2012 cuyos resultados se plasmaron en Concepto Técnico N° 01396 de 14 de febrero de 2014, practicada con el fin de realizar la medición de los decibeles generados en el establecimiento **PUEBLO OCULTO** ubicado en la Carrera 91 No. 147 - 55 Local 33 de Localidad de Suba de esta ciudad, se evidencia que los niveles de presión sonora producidos por el citado establecimiento sobrepasan los límites establecidos en la Resolución 627 de 2006 y, al sobrepasar dichos límites máximos permitidos por la Ley



para emisión de ruido estos traspasan los límites del establecimiento de comercio al generar impacto al exterior del mismo pues las emisiones producidas por el home theater con 4 parlantes llegan al exterior del local a través de su puerta de ingreso afectando a los vecinos y vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.4. del Decreto compilatorio 1076 de 2015 (Artículo 45 del Decreto 948 de 1995), al generar ruido que traspasó los límites de una propiedad con su actividad en horario nocturno acorde a lo señalado en el Concepto técnico 01396 de 2014.

Lo antes indicado, permite definir a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, como responsable de la infracción del artículo 45 del Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.5.1.5.4.; por lo cual dicha infracción normativa contenida en el Cargo Segundo, del artículo primero, del Auto 01084 de 12 de mayo de 2015 está llamado a prosperar y así se declarará en la parte resolutive de esta decisión.

Ahora bien, en relación a la infracción normativa del artículo 51 del Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.5.1.5.10. contenida en el en el cargo tercero, del Artículo Primero, del Auto 01084 del 12 de mayo de 2015 y que refiere el deber de emplear los "...sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados...", se debe resaltar que de la misma forma este deber se incumple por parte de **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, pues de haber tenido los sistemas de control adecuados y haberlos empleado o usado, hubiese evitado que la emisión de ruido con un aporte sonoro de 87.1dB(A) en horario nocturno, para un Sector B. tranquilidad y ruido moderado, Zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicio, sector normativo 14, subsector de uso II en horario nocturno, hubiese perturbado las zonas aledañas habitadas y con mayor razón cuando dicha emisión supera los estándares permitidos por la ley ambiental como se indicó supra.

Es por ello y como se indicó anteriormente, a través del **Concepto Técnico No 01396** de 14 de febrero de 2014, se logró determinar que la emisión de ruido es generada en el establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, por instrumentos musicales, un (1) home theater y cuatro (4) parlantes, lo cual se verificó a través de la prueba de sonometría practicada por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., que prueba de forma clara que dicho establecimiento de comercio traspasó los límites máximos permisibles de emisión de ruido, con un aporte sonoro de **87,1dB(A) en horario nocturno**, para un Sector B.



tranquilidad y ruido moderado, en una zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios, sector normativo 14, subsector de uso II; elementos que estaban bajo el deber de cuidado y responsabilidad de **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, y por ende, ésta tenía la obligación de no permitir que la emisión de ruido superara los estándares permitidos, a la vez que se emitieran sonidos que traspasaran los límites de la propiedad del establecimiento de comercio con la actividad económica desarrollada, y finalmente, de haber empleado los sistemas de control necesarios y adecuados habría podido evitar que dichas emisiones perturbaran las zonas aledañas habitadas, hechos que la hacen responsable de la infracción del Artículo 9, Tabla 1 de la Resolución 627 de 2006 para una Sector B. tranquilidad y ruido moderado, en una zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios y los Artículo 45 y 51 del Decreto 945 de 1998 compilado en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.5.1.5.4 y 2.2.5.1.5.10 y así será declarado en la parte resolutive de la presente decisión.

Así las cosas, en el expediente obran suficientes pruebas conducentes, documentales y técnicas que dan cuenta de la responsabilidad de **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, ubicado en la Carrera 91 No. 147 - 55 Localidad de Suba de esta ciudad, por el incumplimiento del artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006 y los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10 del Decreto 1076 de 2015, puesto que se concluyó que el generador de la emisión **INCUMPLE** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma, **Sector B. tranquilidad y ruido moderado, en una zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios, sector normativo 14, subsector de uso II en horario nocturno**, a la vez que dicho ruido generado traspasa los límites de la propiedad afectando el recurso aire, la salud humana y el medio ambiente y donde dicha emisión se genera al no emplear los sistemas de control adecuados siendo su obligación y donde dichas pruebas no fueron controvertidas o tachadas de falsas, lo cual confirma su legalidad, y se constituyen como documentos útiles e idóneos para acreditar la responsabilidad frente a la infracción ambiental cometida.

De conformidad con lo expuesto cabe resaltar lo dispuesto por la Carta política: *“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.”*

En concordancia, la Corte Constitucional en Sentencia T-254 de 1.993 señala:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo



*económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que **el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación***" subrayado y negrita fuera de texto.

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

Adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T-536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

"...Para esta Corte, entonces, no cabe duda de que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia..."

De acuerdo a la interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993.

Ahora bien, verificado el expediente **SDA-08-2014-1104** se evidencia la prueba del hecho que se constituye en infracción ambiental como lo es el superar los niveles de emisión de ruido por encima de los límites establecidos por las normas ambientales acorde al Concepto Técnico 01396 del 14 de febrero de 2014; adicionalmente, se verifica la unidad de contaminación por ruido (UCR) con aporte muy alto; así mismo, en la visita desarrollada, se verifica que el nivel del aporte sonoro de las fuentes específicas fue de **Leq_{emisión} 87,1dB(A)**, es decir, por encima de los parámetros establecidos en el Artículo 9, Tabla 1 de la Resolución 627 de 2006 para un Sector B. tranquilidad y ruido moderado, Zona residencial con áreas delimitadas de comercio y servicio sector normativo 14, subsector de uso II, en horario nocturno; de la misma forma las emisiones producidas traspasan los límites de la propiedad (Establecimiento Pueblo Oculto) y no se emplean allí los sistemas de control necesarios y suficientes para evitar lo anterior afectando con ello zonas aledañas habitadas.

Así las cosas, la sentencia C-449 de 2015 de la Corte Constitucional señala de forma clara que quien desarrolle una actividad económica, debe someter la misma al



cumplimiento estricto de la normatividad ambiental, de forma previa a su ejecución y siempre respetando los límites o parámetros establecidos por dicha normatividad, en protección al medio ambiente, la salud humana y los recursos naturales, lo que como se mencionó no fue desarrollado por la investigada; por ende **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, con desconocimiento de la normatividad vigente, la que dicho de otra forma debía conocer para la ejecución de su actividad económica, y con conocimiento de haber superado los niveles de emisión de ruido define su actuar a título de dolo en zona afectada por ruido y con mayor razón cuando había sido requerida con anterioridad mediante Acta – Requerimiento 1746 del 2012.

Que en conclusión, es obligación de la Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones legalmente establecidas y en el ámbito de su competencia, hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

VIII. CONSIDERACIONES

• GRADO DE AFECTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Que la Resolución 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en su artículo 7 establece como se determina el grado de afectación ambiental, teniendo en cuenta atributos, criterios y valoraciones preestablecidos y descritos dentro del mismo artículo.

Que de conformidad con lo anterior, el **Informe Técnico De Criterios 00473 de 11 de abril de 2019** indica que una vez revisado, valorado y ponderado el riesgo de afectación al componente social de acuerdo a la tabla de clasificación de importancia de la afectación, contenida en el artículo 7 de la Resolución 2086 de 2010 MVADT; el criterio de valoración de afectación clasifica como leve, con importancia de afectación 17 y magnitud potencial de afectación de 35.

1. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVANTES Y ATENUANTES

Que las causales de atenuación o agravación de la conducta son taxativas y se encuentran consagradas en los artículos 6 y 7 de la ley 1333 de 2009.



Que una vez realizado el estudio técnico y jurídico pertinente, se evidencia que para el caso particular se presentan las siguientes circunstancias, en concordancia con lo establecido en el informe de criterios N.º 00473 de 11 de abril de 2019:

Agravante del Numeral 8, artículo 7, de la Ley 1333 de 2009, que establece:

“8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.”

Al efecto el informe antes citado lo confirma al señalar que “Existe un beneficio ilícito relacionado con los costos evitados por el infractor para el cumplimiento normativo”.

Atenuante del Numeral 3, del artículo 6, de la Ley 1333 de 2009, que establece:

“3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana.”

De la misma forma, el informe Técnico 00473 de 2019 lo confirma al indicar que “...teniendo en cuenta que la infracción fue evaluada bajo el riesgo de afectación, no determina la existencia de un daño”.

2. SANCIÓN A IMPONER

Que son sujetos de la imposición de medidas sancionatorias, a quienes se les encuentre demostrado que por acción u omisión lesionen las disposiciones ambientales, dando lugar a las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 establece:

“ARTICULO 40.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la [Ley 768 de 2002](#) y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...)”

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, mediante Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció los criterios que deben atender las



autoridades ambientales para la imposición de las sanciones previstas, compilado actualmente en el Decreto 1076 de 2015.

Que una vez desarrollados y evaluados los criterios de Riesgo de afectación, circunstancias agravantes y atenuantes, y capacidad socio económica del Infractor, se determina como **SANCIÓN PRINCIPAL A IMPONER MULTA**, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico De Criterios N.º 00473 de 11 de abril de 2019.

3. TASACIÓN DE LA MULTA

Que una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009, y advertida la procedencia de sanción para la infracción cometida por **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015 y en la Resolución MAVDT 2086 de 2010, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría, emitió el **Informe Técnico de Criterios No. 00473 de 11 de abril de 2019**, obrante en el expediente, el cual hace parte integral de la presente decisión, el que desarrolló los criterios para la imposición de la sanción consistente en MULTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015.

“Artículo 4º. - Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:

B: Beneficio ilícito

a: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

Que en cumplimiento de la precitada norma, a través del Informe **Técnico de Criterios No. 00473 del 11 de abril de 2019**, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los citados criterios, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 del MAVDT, la cual prevé:

“(…)



Artículo 4.- Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el Artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

(...)"

Que así las cosas, la Dirección de Control Ambiental, por medio del **Informe Técnico de Criterios No. 00473 del 11 de abril de 2019**, dio aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 del MAVDT, de cara a los criterios para la imposición de la sanción de **MULTA** y la orden de ejecutar acciones que restauren el impacto causado, respecto de la infracción investigada en contra de **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, así:

"(...)

5.CALCULO DE LA MULTA

Dando cumplimiento al artículo 4 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 del Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y habiendo adelantado la metodología para la tasación de multa, se da evaluación a la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * r) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Beneficio ilícito	\$ 0
Temporalidad	1
Grado de afectación ambiental y/o riesgo	\$ 191.816.509
Circunstancias Agravantes y Atenuantes	0
Costos Asociados	\$ 0.2
Capacidad Socioeconómica	0.01
Multa	\$2.301.798

$$\text{Multa} = \$ 0 + [(1 * \$ 191.816.509) * (1+0.2 +0)] * 0.01$$

$$\text{Multa} = \$ 2.301.798$$

(...)"

Que en concordancia con lo expuesto, resulta procedente imponer a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, la sanción de



multa en cuantía equivalente a **DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.301.798)**, los cuales deberán ingresar al patrimonio de esta entidad.

Que la sanción a imponer mediante la presente Resolución no exonera **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, de cumplir con las acciones y obligaciones ordenadas por esta entidad, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la Jurisdicción Coactiva.

IX. CONSIDERACIONES FINALES

El inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, determina que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar al Procurador Judicial Ambiental y Agrario los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales; razón por la cual en la parte resolutive del presente Acto Administrativo se ordenará la expedición de los oficios correspondientes para tal efecto.

Por otra parte, una vez en firme el presente Acto Administrativo, la Secretaría deberá efectuar el reporte respectivo al Registro Único de Infractores Ambientales – **RUIA**, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

X . COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que por su parte, el artículo 5 del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d), asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.



Que a su vez, el artículo ibidem en su literal i), asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución No. 02566 del 15 de agosto de 2018, establece la delegación de funciones del Secretario Distrital de Ambiente, en el Director de Control Ambiental, dentro de las cuales se encuentra:

“Expedir los Actos Administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.”

Que en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. -Declarar Responsable Ambiental a Título de Dolo a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO**, ubicado en la Carrera 91 No. 147 -55 Local 33 de la Localidad de Suba de esta ciudad, de los cargos Primero, Segundo y Tercero formulados mediante el Artículo Primero del Auto No. 01084 del 12 de mayo de 2015, por vulnerar el artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006 y los artículos 2.2.5.1.5.4. y 2.2.5.1.5.10 del Decreto 1076 de 2015 (Artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995), al superar los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en un Sector B. tranquilidad y ruido moderado, Zona RESIDENCIAL con zonas delimitadas de comercio y servicios, sector normativo 14, subsector de uso II en horario nocturno, generados mediante el empleo de instrumentos musicales, un (1) home theater y cuatro (4) parlantes, utilizados en el establecimiento de comercio, en donde el nivel equivalente del aporte sonoro de las fuentes específicas ($Leq_{emisión}$) fue de 87,1 dB(A), superando el nivel máximo permitido de 55dB(A) en horario nocturno, a la vez dado que dicha emisión de ruido traspasa los límites del establecimiento comercial y por no emplear y tener los sistemas de control adecuados que evitaran se perturben las zonas habitadas



aledañas todo ello en horario nocturno, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. -Imponer a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, **MULTA** por un valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.301.798)**, acorde a lo señalado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

PARAGRAFO PRIMERO. - La multa por la infracción evidenciada en los Cargos Imputados, se impone por el Factor de Riesgo Ambiental.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaría Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, ventanilla número 2, ubicada en el Supercade de la Carrera 30 con Calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el recaudo de conceptos varios, disponible en la sede de la entidad, ubicada en la Carrera 14 No. 54 - 38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente **SDA-08-2014-1104**.

PARÁGRAFO TERCERO. - Si el citado obligado al pago de la multa no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y, por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO CUARTO. - Declarar el **Informe Técnico de Criterios No. 0473 del 11 de abril de 2019**, como parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, en la Carrera 91 No. 147 -55 Local 33 y en la avenida calle 132 N° 92-62 Casa 23 de la Localidad de Suba de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984.



PARÁGRAFO PRIMERO. – La (los) propietario (os) y/o representante legal del establecimiento comercial, o su apoderado debidamente constituido deberá presentar al momento de la notificación, documento idóneo que la acredite como tal.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Al momento de la notificación, se hará entrega al sancionado de copia simple del **Informe Técnico de Criterios No. 00473 del 11 de abril de 2019**, el cual únicamente liquida y motiva la Imposición de la Sanción de Multa, en cumplimiento del artículo 3 del Decreto 3678 de 2010 y el Decreto 1076 de 2015 y hace parte integral de la presente decisión.

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. – Ordenar, una vez ejecutoriado y en firme la presente decisión, el archivo definitivo de las diligencias administrativas que reposan en el expediente SDA-08-2012-1104, perteneciente a **MARTHA ROCIO PEÑA ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 52.582.623, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio **PUEBLO OCULTO** ubicado en la en la en la Carrera 91 No. 147 -55 Local 33 de la Localidad de Suba de esta ciudad, en virtud del Decreto 01 de 1984 y la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo ente de control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO OCTAVO. - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del **RUIA**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO. – Remitir copia simple de la presente decisión a la Alcaldía local de Suba para lo de su competencia.



ARTÍCULO DECIMO. - Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, en concordancia con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de agosto del año 2019

**CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

LEIDY KATHERIN TERREROS DIAZ C.C: 1032450717 T.P: N/A

CPS: Contrato N° 2019-0279 de 2019 FECHA EJECUCION: 24/04/2019

Revisó:

EDWARD ADAN FRANCO GAMBOA C.C: 7170299 T.P: N/A

CPS: CONTRATO 2019-0022 DE 2019 FECHA EJECUCION: 09/05/2019

Aprobó:

Firmó:

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA C.C: 35503317 T.P: N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 11/08/2019

SDA-08-2014-1104